

Campaña Mundial por la Educación

Documento informativo sobre las áreas clave principales establecidas por el Plan Estratégico 2023-2027

Profesores y Enseñanza

1. Antecedentes

"Las normas internacionales, los organismos de expertos y los exámenes sitúan sistemáticamente a los docentes en el centro del acceso universal a una educación equitativa y de alta calidad"¹. Aunque todos compartimos esta afirmación, tras ella se esconde el abismo entre la retórica y las realidades concretas de los países, especialmente en las comunidades marginadas, donde la escasez de docentes sigue creciendo y los que permanecen en activo lo hacen con grandes limitaciones y poco reconocimiento.

Según la UNESCO, en todo el mundo se necesitan 69 millones de nuevos profesores para cumplir los objetivos educativos de 2030, de los cuales casi 25 millones son necesarios para atender a los niños de primaria y 44 millones para los de secundaria. Se necesitan otros 28 millones de profesores para sustituir a sus colegas por jubilación de aquí a 2030². Estos datos no incluyen las necesidades de docentes en los sistemas de educación y aprendizaje de adultos y de educación de la primera infancia, que históricamente han permanecido en desventaja, dado el elevado número de adultos analfabetos y la abrumadora privatización de la educación y el cuidado de los niños pequeños, a menudo a cargo de personal sin formación ni capacitación profesional.

Siendo el África subsahariana donde posiblemente existan los mayores retos, hay que añadir que esta región tiene un déficit de 4,1 millones de profesores: casi 1 millón en educación primaria y 3,3 millones en secundaria. Para 2030, los países de la región necesitarán contratar un total de 15 millones de profesores: 6,1 millones en primaria y 8,9 millones en secundaria. Se calcula que, para alcanzar el ODS 4 en 2030, los países tendrán que contratar a 8,7 millones de nuevos docentes y sustituir a otros 6,3 millones de profesores que han abandonado la profesión³.

Con la Covid-19, el profesorado y la situación de la enseñanza se enfrentaron a nuevas amenazas, provocadas no sólo por la pandemia en sí, sino también por el apetito comercial de algunas corporaciones de la comunicación y la tecnología, que aprovecharon la crisis sanitaria para hacer negocio. Con ello, surgieron tendencias que directa o subrepticamente hicieron creer que las

¹ UNESCO. Guía para el desarrollo de políticas docentes. París, 2019, p.11

² <https://groundreport.in/world-needs-69-million-new-teachers-to-achieve-education-target-un-report/>

³ Grupo de trabajo de profesores. Cerrando la brecha. Garantizar que haya suficientes profesores cualificados y amparados en la región de África Subsahariana. París, 2021.

escuelas son innecesarias y costosas y que era posible prescindir de la labor docente, sustituyéndola por programas digitales de autoaprendizaje.

Estos lamentables hechos contribuyeron a empobrecer el trabajo docente y a degradar la enseñanza, sometiéndola a mecanismos que eliminan los beneficios sociales del empleo educativo.

Como sabemos, los profesores son uno de los componentes más importantes de la mano de obra de un país (el 2-3% o más del empleo formal en muchos países); son el principal recurso humano de cualquier sistema educativo o entorno de aprendizaje y el componente financiero más importante del presupuesto de cualquier autoridad educativa, ya que representan entre el 60% y más del 80% de los gastos recurrentes (no de capital) de la educación pública⁴.

Con la pandemia se profundizaron⁵ los intentos de imponer medidas de austeridad dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a un sector mayoritario de trabajadores públicos. Con ello, se extendieron prácticas de trasplante a la educación, modelos de explotación como el trabajo a destajo y la contratación por tiempo determinado, en muchos casos sin garantizar el salario mínimo ni el trabajo digno.

Estos mecanismos han sido denunciados sistemáticamente por los sindicatos de docentes, por la *Education International* y por la CME.

El cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 4) pretende garantizar mejores oportunidades de aprendizaje y una educación más equitativa e inclusiva para todos. En concreto, la meta 4.c del ODS pide un aumento de la oferta de docentes cualificados, especialmente en los países de bajos ingresos. Sin embargo, como afirma Antonia Wulff, "ha habido numerosos intentos de reformular la agenda y alterar su alcance, como por ejemplo quitando prioridad a determinados objetivos, en particular los relativos a los entornos de aprendizaje y a los profesores"⁶.

Este problema debería llamar la atención sobre la urgencia de abordar los problemas de la educación en general, y especialmente los relacionados con la enseñanza y el profesorado, en el marco de los derechos humanos y no limitarlos al ámbito de la Agenda de Desarrollo Sostenible.

El marco de los derechos humanos contiene obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados, que incluyen los derechos a la educación, en la educación y a través de ella, en un contexto amplio que se complementa con los derechos laborales, económicos, sociales y culturales, que en conjunto exigen garantizar y proteger la dignidad de la profesión docente.

⁴ Ibidem

⁵ Education International. Guía del educador para el WDR 2018. Bruselas, 2018.

⁶ Wulff, Antonia (ed). Calificando el Objetivo Cuatro. Tensiones, amenazas y oportunidades en el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre Educación de Calidad. Brill Sense, Leiden, 2020, pág.2

La Campaña Mundial por la Educación también ha denunciado la persecución y el asesinato de docentes en muchas situaciones de conflicto y ha pedido a los gobiernos y a la comunidad internacional que promuevan y desarrollen políticas integrales para proteger sus vidas y sus condiciones de trabajo.

La CME también está preocupada por el aumento del autoritarismo y las amenazas a la democracia, que incluyen no sólo el cierre de espacios de participación, sino también la represión de la protesta social pacífica y legítima y la criminalización de estudiantes y docentes, muchos de ellos mujeres que defienden el derecho humano a la educación.

2. El Plan Estratégico de la CME (2023-2027)

La CME cree que los docentes son fundamentales para el éxito y el futuro de la educación, por lo que el Plan Estratégico 2023-2027 de la CME insta a invertir en la profesión docente, como una de las inversiones más inteligentes para generar beneficios para un progreso social justo y sostenible.

El Plan Estratégico también sugiere una serie de acciones que el movimiento de la CME debería emprender para que las políticas, los sistemas y las instituciones educativas:

- Valoren y remuneren adecuadamente a los docentes de todos los niveles y establezcan condiciones de trabajo propicias y equitativas
- Impliquen a los docentes, al personal de apoyo a la educación y a los sindicatos de docentes en la configuración de los sistemas e instituciones educativos
- Cubran urgentemente el creciente déficit de profesores, teniendo debidamente en cuenta la diversidad y la igualdad de la profesión docente.
- Proporcionen un desarrollo profesional continuo y oportunidades de aprendizaje a los profesores de todos los niveles para satisfacer las necesidades cambiantes de los alumnos en toda su diversidad y de la sociedad en general.
- Maximicen la seguridad de los profesores, del personal de apoyo a la educación y de los alumnos en todos los contextos.

Estas medidas deben ir acompañadas de la movilización general de los miembros de la CME, para garantizar que los Estados proporcionen una educación y un aprendizaje libres y abiertos, de fácil acceso y contextualmente pertinentes, y protejan la autonomía profesional y la libertad académica de los docentes en todos los niveles y modalidades y en todos los contextos, incluidas las emergencias.

3. Retos críticos

La CME considera que la escasez de profesorado y las amenazas a la profesión docente afectan a todo el planeta porque la construcción de una ciudadanía global basada en el respeto y la promoción de los derechos humanos como forma de vida sólo puede lograrse superando todas

las formas de exclusión y marginación en todas partes. Sin embargo, la CME constata que la escasez de docentes es dramática en determinadas regiones y países -con un efecto perverso sobre los estudiantes con discapacidad y las poblaciones indígenas- y no es un problema en otros.

Como bien afirma el miembro fundador de la CME, la Education International, el mundo debe comprometerse a aumentar la inversión en sistemas educativos públicos de calidad, a garantizar los derechos laborales y unas buenas condiciones de trabajo para los docentes y el personal de apoyo a la educación, y a respetar a los docentes y sus conocimientos pedagógicos. Mejorar las condiciones de la enseñanza en estas regiones y países requiere aplicar nuevas estrategias descolonizadoras, lo que implica eliminar las medidas de austeridad que impiden a los Estados pagar salarios dignos a los docentes, para lo que también sería necesario resolver el peso de la deuda en los países de renta baja y media.

Los datos globales revelan que la crisis de aprendizaje de la que se informa a diario en diversos medios de comunicación se debe en parte al creciente debilitamiento de la labor docente y a la exclusión de los profesores de la participación en la toma de decisiones.

Este debilitamiento tiene un efecto dramático en todos los procesos educativos, pero principalmente revela que más que una crisis de aprendizaje, el mundo enfrenta una crisis de desigualdad, en la que los países de ingresos bajos y medios y las poblaciones de la primera infancia, jóvenes y adultos históricamente discriminadas, pagan las consecuencias de este tipo de violencia estructural.

Políticas educativas que tengan en cuenta la perspectiva de género; inversiones financieras para garantizar a los profesores un nivel de vida digno; acceso a la tecnología y formación pedagógica para enseñar en las situaciones más diversas y complejas, son algunas de las lagunas que los gobiernos deben abordar urgentemente para garantizar el derecho de todos a la educación, incluyendo a las mujeres y a las personas con discapacidad. No debemos olvidar que los docentes de los campos de refugiados imparten sus clases en entornos de hacinamiento y en condiciones sanitarias deficientes que no sólo hacen que sus vidas sean considerablemente complejas, sino que también limitan las posibilidades de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos.

Por último, la CME está de acuerdo en que los profesores desempeñan un papel crucial en el desarrollo y el fomento de los valores democráticos en las comunidades. Sin embargo, el fracaso a la hora de inculcar valores de democracia, derechos humanos y estado de derecho -acompañados de un debate abierto y un pensamiento crítico - no es un accidente en las dictaduras⁷.

Como sociedad, no podemos simplemente esperar que los docentes -que viven sin la protección y la formación necesarias- puedan asumir con éxito la responsabilidad de educar a niños, jóvenes y adultos en situaciones de emergencia. Los profesores necesitan una formación especial para apoyar a las comunidades afectadas por la guerra, el cambio climático, las catástrofes y, entre

⁷ *Education International*. Guía del educador para el WDR 2018. Bruselas, 2018.

otras emergencias, el hambre. Mientras seguimos siendo testigos de situaciones de emergencia como la crisis de los refugiados Rohingya en Bangladesh⁸, el desplazamiento masivo dentro y fuera de las fronteras nacionales de civiles en Afganistán⁹, y las personas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria en el Cuerno de África¹⁰, estas emergencias a menudo se entrecruzan.

Es injusto esperar que los profesores resuelvan problemas que no se debaten ni resuelven en los correspondientes ámbitos políticos nacionales e internacionales. Pero es imposible que estos problemas se resuelvan sin la participación de los profesores. Romper la doble moral es una tarea que debemos emprender con determinación.

4. El camino a seguir

La labor de incidencia de la CME debe seguir centrándose en las necesidades y los derechos de los docentes, garantizando que sigan estando en el centro de la educación.

Sin embargo, es conveniente ampliar el enfoque, de modo que los sindicatos de docentes se incluyan progresivamente en todas las Coaliciones Nacionales de Educación. De este modo, la voz y la experiencia de los docentes -especialmente de los más jóvenes- enriquecerán la toma de decisiones sobre las acciones de incidencia.

Un elemento fundamental de la democracia en la educación, anclado en las normas internacionales y las buenas prácticas, es la libertad académica o profesional. Parte del desarrollo de las competencias democráticas consiste en crear y mantener un entorno de libertad de expresión, de modo que, si la libertad académica se protege eficazmente para los profesores, se crea un buen clima para el aprendizaje de la democracia para los alumnos¹¹.

Este principio abre nuevos retos para la CME, ya que la capacidad de los profesores para inculcar valores democráticos, justicia medioambiental, igualdad de género y creación de masa crítica requiere un tipo de educación y formación inicial a la que no todo el mundo tiene acceso. Influir en los programas de formación del profesorado, por tanto, es una vía estratégica que debería explorarse con más decisión, especialmente en las universidades o instituciones equivalentes encargadas de la formación del profesorado.

Otras acciones de incidencia deben dirigirse a la adopción de marcos legales y políticas concretas que garanticen a los docentes las mejores condiciones de trabajo, incluyendo la preparación en contextos de emergencia.

⁸M. Mahruf C. Shohel (2020) Educación en situaciones de emergencia: retos de la educación de los niños rohingya que viven en campos de refugiados en Bangladesh, Encuesta sobre Educación.

⁹ Véase ACNUR (2021). Urgente: Rápida escalada en Afganistán.

¹⁰ Brain, L, and Hammond, L. (2020). Seguridad alimentaria durante la pandemia de COVID-19: desafíos superpuestos, respuestas emergentes en el Cuerno de África. SOAS.

¹¹ *Education International*. Sobre educación y democracia, op cit, pág. 28

Especialmente importante es garantizar las condiciones necesarias para el trabajo docente en campos de refugiados, centros de acogida de inmigrantes y solicitantes de asilo e instalaciones similares, con especial protección para las profesoras y alumnas, e incluir a los profesores y a sus organizaciones representativas en las estructuras de toma de decisiones a todos los niveles.